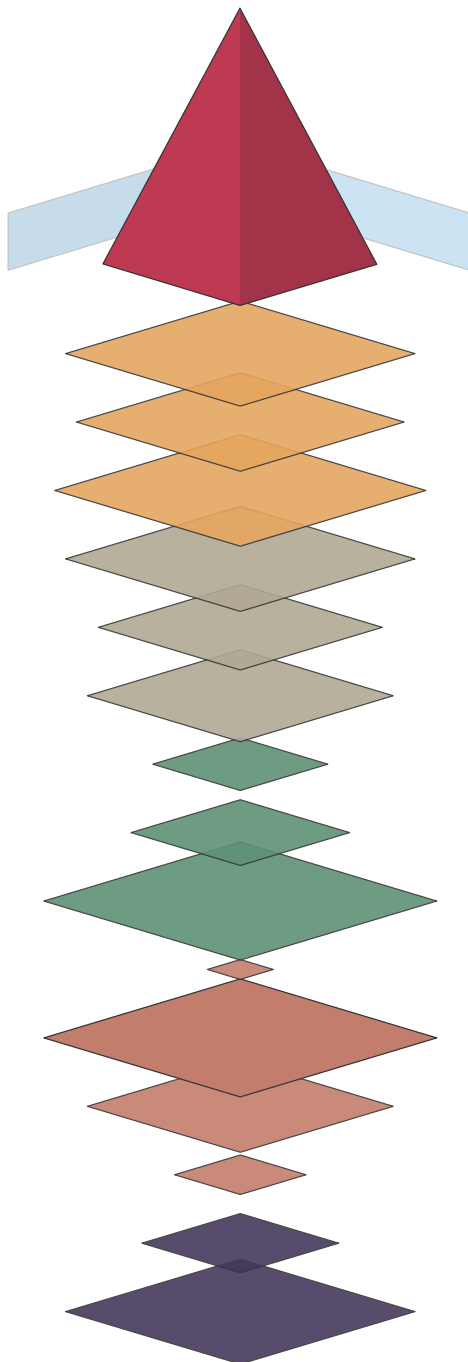




VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)



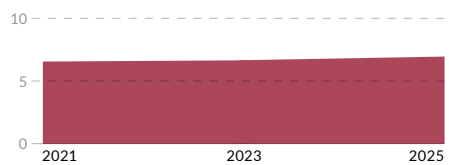
6.97 $\nearrow 0.25$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

20.º de 193 pays $\nearrow 4$

7.º de 35 países americanos $\nearrow 1$

5.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES

6.43 $\nearrow 0.40$

TRATA DE PERSONAS	8.00 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE PERSONAS	7.50 0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	8.50 $\nearrow 1.00$
TRÁFICO DE ARMAS	8.00 0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	6.50 $\nearrow 1.00$
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	7.00 $\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	4.00 $\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FAUNA	5.00 $\nearrow 2.00$
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9.00 0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	1.50 $\searrow 0.50$
COMERCIO DE COCAÍNA	9.00 0.00
COMERCIO DE CANNABIS	7.00 0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.00 0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	4.50 $\nearrow 1.00$
DELITOS FINANCIEROS	8.00 0.00



ACTORES CRIMINALES

7.50 $\nearrow 0.10$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	9.50 0.00
REDES CRIMINALES	5.50 $\nearrow 0.50$
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	9.00 0.00
ACTORES EXTRANJEROS	7.50 0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	6.00 0.00



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.

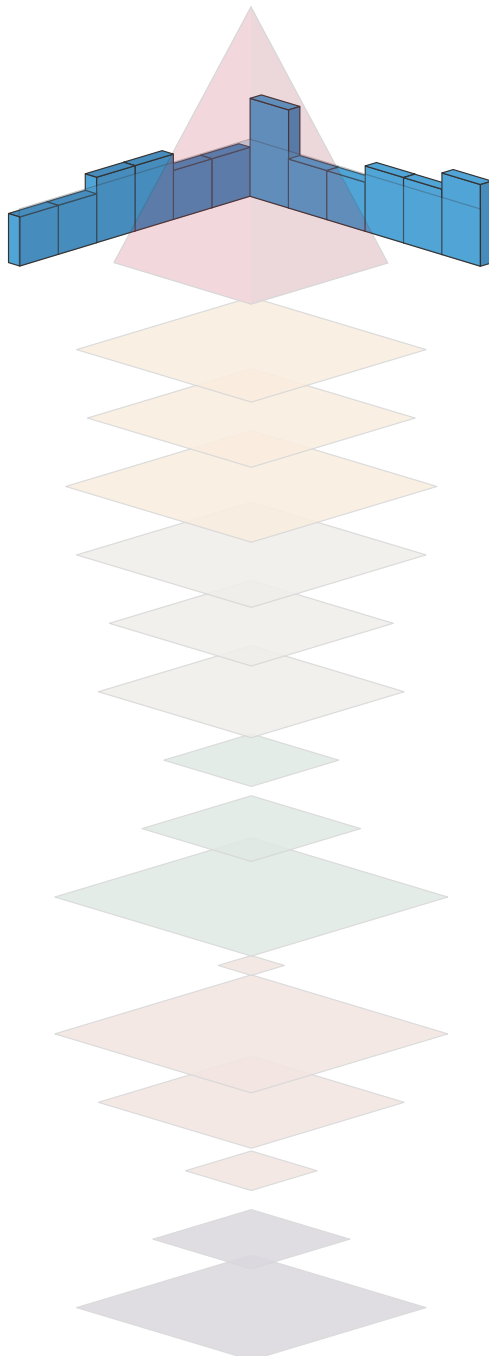


Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)



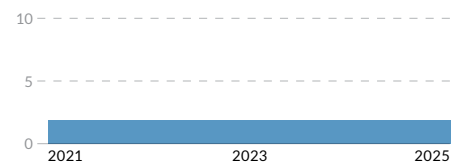
1.88_{0.00}

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

188.º de 193 pays ↘3

35.º de 35 países americanos -

12.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA **1.50** ↘0.50

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS **1.50** 0.00

COOPERACIÓN INTERNACIONAL **2.00** ↗0.50

POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES **2.00** 0.00

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN **1.50** 0.00

CUERPOS DE SEGURIDAD **1.50** 0.00

INTEGRIDAD TERRITORIAL **3.00** 0.00

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO **1.50** ↘0.50

CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA **1.50** ↘0.50

APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS **2.00** ↗0.50

PREVENCIÓN **2.00** 0.00

ACTORES NO ESTATALES **2.50** ↗0.50



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Venezuela sigue siendo un centro neurálgico para la trata de personas en la región, ya que la desesperación económica y la migración forzada a gran escala alimentan estas actividades. Las víctimas se quedan en Venezuela o se envían al extranjero, a menudo para realizar trabajos forzados en la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. Las mujeres y las niñas son explotadas en el tráfico sexual. El Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, colabora con grupos colombianos para traficar con mujeres a las que obliga a ejercer la prostitución. La prevalencia de la esclavitud moderna sigue siendo elevada, debido a la vulnerabilidad económica. Las redes criminales también atraen a los migrantes con falsas promesas de empleo, para luego obligarlos a participar en economías ilícitas, en particular la minería ilegal. Algunos funcionarios venezolanos, incluidos policías y militares, han estado implicados en operaciones de tráfico, ya que aprovechan sus cargos para facilitar el cruce de fronteras. A pesar de la vigilancia internacional, la aplicación de la ley sigue siendo ineficaz y los altos niveles de impunidad y de corrupción dificultan cualquier medida significativa contra las redes de tráfico.

Las operaciones de tráfico de personas siguen prosperando y Venezuela es fundamental como país de origen, debido a la prolongada crisis económica. Millones de venezolanos han huido del país desde el 2014 y muchos de ellos han recurrido a redes de tráfico para recorrer las peligrosas rutas hacia Estados Unidos y los países latinoamericanos vecinos. Los grupos organizados, como el Tren de Aragua, controlan las principales rutas del tráfico y facilitan el paso a través de redes ilícitas que se extienden por todo el continente. Estas rutas incluyen la entrada a Colombia, Brasil y las islas del Caribe y los delinquentes cobran tarifas exorbitantes y exponen a los migrantes a riesgos extremos, como el secuestro, la explotación y la muerte. Algunos grupos criminales colombianos, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), supervisan los sistemas de extorsión a lo largo de los corredores migratorios y exigen pagos a los migrantes y a sus traficantes. La corrupción institucional y las restricciones legales a la migración agravan las vulnerabilidades, lo que obliga a muchos a recurrir a los actores ilícitos en busca de ayuda.

La extorsión sigue estando profundamente arraigada en Venezuela y afecta tanto a la población urbana como a la rural. Las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, el Tren del Llano y el ELN, ejercen un control territorial mediante prácticas violentas de extorsión, dirigidas a las empresas, las industrias y los particulares. Sobre todo el ELN sigue ampliando su influencia y su control por todo

el país y aumenta sus prácticas extorsivas en diversas regiones, como el estado de Apure y los distritos del Arco Minero del Orinoco (AMO), entre otras. Allí extorsionan sistemáticamente a las empresas legales, los ganaderos y los residentes y han establecido una gobernanza de facto sobre las actividades criminales y las sociales. A pesar de algunos esfuerzos ocasionales por hacer cumplir la ley, la complicidad del Estado sigue permitiendo que la extorsión persista con una resistencia mínima.

TRÁFICO

Venezuela sigue siendo un punto conflictivo para el tráfico de armas y existe mucha conexión entre los actores estatales y las redes criminales. Los oficiales militares y los funcionarios corruptos facilitan la venta de armas de fuego a grupos como el Tren de Aragua, que posteriormente las distribuyen por toda la región. Las granadas se han convertido en una herramienta característica del crimen organizado y a menudo se utilizan en los ataques de extorsión contra las empresas. Las armas venezolanas también se trafican a Trinidad y Tobago, mientras que las municiones se introducen de contrabando en el país desde Colombia. La transparencia en la adquisición de armas sigue siendo casi inexistente, lo que facilita aún más las transferencias ilícitas.

Sigue prosperando el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como el tabaco y el alcohol. Debido a las disparidades económicas entre Venezuela y sus vecinos, las redes de contrabando importan productos de Colombia y de Brasil, con lo cual Venezuela se ha convertido en un país de destino para este comercio y ha creado un próspero mercado criminal de productos extranjeros dentro de sus fronteras. Todo indica que las operaciones de contrabando están gestionadas principalmente por redes criminales de estructura poco rígida, lo que permite la importación de estos productos desde los países vecinos. Hay actores estatales, entre ellos agentes de Policía y militares, implicados en las actividades de contrabando. Se cree que estos funcionarios corruptos controlan los corredores de contrabando e imponen tasas a los traficantes.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora siguen siendo una preocupación emergente en Venezuela. El Arco Minero del Orinoco, que es el epicentro de las operaciones mineras no reguladas, se ha convertido en un punto focal para la extracción ilegal de madera, donde se talan especies de gran valor, como la caoba y el cedro, que se introducen de contrabando en Colombia. Los actores estatales corruptos facilitan el blanqueo de la madera, por lo que cuesta regular el comercio. A pesar de los esfuerzos esporádicos por hacer cumplir la ley, la deforestación continúa sin cesar.

El tráfico de especies silvestres también está muy extendido, impulsado tanto por el consumo interno como por la demanda internacional. Se ha identificado a Venezuela como el país más vulnerable de América del Sur en cuanto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y se contrabandean aletas de tiburón y vejigas de pescado a través del lago Maracaibo, para después exportarlas a Asia. Algunos animales exóticos, como guacamayos, osos hormigueros y tortugas, se trafican a Europa y a Estados Unidos. Una vez más, la complicidad de los actores estatales ha permitido la expansión de estas operaciones, a pesar de la vigilancia internacional. En general, las redes criminales controlan el tráfico mediante la violencia y la intimidación. Sin embargo, en algunos casos se ha observado la participación de empresas privadas, entidades públicas, comunidades locales y redes criminales organizadas.

Los delitos contra los recursos no renovables, en particular la minería ilegal del oro, dominan la economía ilícita de Venezuela. Las operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco están controladas por grupos armados no estatales, como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos grupos ejercen un control territorial brutal, extorsionan a los mineros y blanquean el oro a través de redes transnacionales. Las rutas de contrabando del oro se extienden hasta África, Asia Occidental y Suiza, con la ayuda de documentación falsificada y de funcionarios corruptos. Si bien el reingreso de Venezuela en el comercio legal del oro ofrece oportunidades de reforma, las actividades ilícitas continúan en gran medida sin control. El contrabando de gasolina ha disminuido, porque se ha reducido la producción nacional, pero el comercio ilícito de combustible subvencionado persiste en las regiones mineras, donde se utiliza para apoyar la extracción ilegal de oro. Por último, la explotación ilegal de coltán y de diamantes y el robo de petróleo contribuyen aún más a la degradación medioambiental y a la inestabilidad económica.

DROGAS

Venezuela se ha convertido en un centro de tránsito clave para el tráfico de cocaína y las rutas van desde Colombia hasta los mercados internacionales de Estados Unidos, Europa y Asia. Los grupos guerrilleros colombianos, sobre todo el ELN y los disidentes de las FARC, gestionan las cadenas de suministro, en colaboración con funcionarios venezolanos corruptos. Se han integrado en las comunidades locales, a menudo manipulando a los jóvenes para que trabajen para ellos, con el pretexto de ofrecerles un empleo legítimo, y se han apoderado de los sistemas judiciales y de las estructuras de gestión locales. La relación simbiótica entre estos grupos guerrilleros y los funcionarios públicos venezolanos ha facilitado sus operaciones, lo que ha dado lugar a un mínimo de violencia, pero a un control significativo de las regiones fronterizas. Las plantaciones de coca se han expandido en los estados fronterizos y se ha pasado del tránsito a

la producción. Aunque han aumentado las incautaciones, la corrupción de las fuerzas de seguridad permite que las operaciones de tráfico continúen con relativa impunidad.

El comercio de cannabis sigue siendo secundario con respecto al de la cocaína, pero continúa creciendo. La marihuana colombiana de alta potencia se introduce de contrabando en Venezuela y se distribuye a través de organizaciones de tipo mafioso. La participación de actores estatales en el tráfico refleja la misma dinámica que en el tráfico de cocaína. A pesar de las medidas coercitivas, la demanda de cannabis sigue siendo estable, especialmente en el mercado brasileño, para el cual Venezuela sirve como lugar de tránsito.

El mercado de las drogas sintéticas sigue siendo reducido, pero ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Las incautaciones recientes indican una disponibilidad limitada, pero creciente, de sustancias como la ketamina y el 2CB. La primera incautación de fentanilo registrada en el país en el 2023 indica la aparición de nuevas rutas de tráfico, aunque el mercado sigue estando poco desarrollado.

Se observa que no hay datos sobre delitos relacionados con la heroína en el país, lo que sugiere que su tráfico sigue disminuyendo. Por lo tanto, el mercado se considera insignificante.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética en Venezuela se han intensificado y los ataques de ransomware y los de denegación de servicio (DDoS) distribuido se han generalizado. Las elecciones presidenciales del 2024 estuvieron marcadas por un importante ataque DDoS contra el Consejo Nacional Electoral que interrumpió el recuento de votos, lo que suscitó preocupación por la integridad electoral. Las instituciones financieras y los proveedores de telecomunicaciones se han enfrentado a incidentes de ransomware de gran repercusión, que han provocado importantes pérdidas económicas y la exposición de los datos de los clientes. A pesar de los casos significativos denunciados en los últimos años, el país no se considera un centro importante para los delitos dependientes de la cibernética.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros están muy extendidos en Venezuela, donde la corrupción, la malversación y el fraude financiero han tenido graves repercusiones en la economía nacional. Muchas de las personas involucradas en estas actividades están vinculadas a estructuras estatales, como instituciones gubernamentales y empresas públicas. Las investigaciones en curso sobre conductas financieras indebidas ponen de relieve el carácter sistémico del problema y las acusaciones implican a algunos actores de alto nivel en operaciones financieras ilícitas. Estos casos suelen apuntar al desvío de fondos públicos a través de transacciones opacas y de

mecanismos extraterritoriales. La falta de independencia judicial y la impunidad generalizada han permitido que los delitos financieros continúen sin control, lo que ha contribuido a la reputación del país como un foco de este tipo de actividades ilícitas.

ACTORES CRIMINALES

Venezuela alberga una serie de grupos de tipo mafioso, muchos de los cuales siempre han ejercido un importante control territorial y de gobernanza. El más notorio es el Tren de Aragua, una organización jerárquica involucrada en una amplia variedad de actividades delictivas, que incluyen la trata de personas, el tráfico de drogas, la extorsión y la ciberdelincuencia. El Tren del Llano, el Tren de Guayana y la Organización R son otros de los grupos estructurados que dominan los mercados ilícitos, en particular la minería ilegal y la extorsión. Estos grupos siempre han mantenido un control social estricto, han regulado el comportamiento público y han impuesto sus propias formas de justicia en las zonas que dominan. Aunque algunos han sufrido reveses, su capacidad de adaptación les permite cambiar de estrategia y mantener las economías ilícitas. Además, la gobernanza criminal desde las prisiones ha contribuido a facilitar las operaciones de estos grupos. Aunque las recientes ofensivas del Gobierno han debilitado su control directo sobre los sistemas penitenciarios, algunos grupos se han fragmentado, pero no han desaparecido del todo.

El panorama criminal del país se caracteriza por contar con redes fluidas y adaptables que operan en diversos mercados ilícitos. Estas redes a menudo difuminan los límites entre las organizaciones estructuradas y las alianzas criminales oportunistas. Los «colectivos» (grupos paramilitares vinculados al Estado) son un ejemplo de esta estructura híbrida y participan en actividades que van desde la represión política hasta la extorsión y el contrabando. A menudo trabajan en colaboración con actores estatales y son difíciles de dismantelar. Además de los «colectivos», hay redes criminales que se dedican al contrabando, la trata de personas y el tráfico de especies silvestres. En las regiones fronterizas, especialmente en Zulia y en Táchira, estos grupos controlan las rutas de comercio informales y gravan con impuestos las mercancías ilícitas. También aprovechan el debilitamiento de la economía venezolana y explotan las tramas de falsificación de moneda y los intercambios en el mercado negro. La adaptabilidad de estas redes les permite persistir, a pesar de las ocasionales ofensivas del Gobierno, lo que refuerza la resiliencia de la economía sumergida de Venezuela.

La criminalidad integrada en el Estado es una de las amenazas más importantes para el Estado de derecho en Venezuela. Hay altos mandos militares, políticos y de los cuerpos de seguridad que están vinculados directamente a diversos mercados ilícitos, como el tráfico de drogas, el contrabando de combustible, la minería ilegal y la extorsión. El llamado «Cártel de los Soles», un término muy utilizado para referirse a los militares involucrados en el tráfico de drogas, es un ejemplo

de hasta qué punto los actores estatales están implicados en el crimen organizado. Sin embargo, los expertos sugieren que, en lugar de ser un cártel centralizado, la participación del Ejército en la criminalidad es fragmentaria y que hay facciones rivales que se dedican a actividades ilícitas para obtener beneficios personales. Los funcionarios también son cómplices de las redes de trata de personas, ya que la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad facilita el movimiento de las víctimas a través de las fronteras. Los actores vinculados al Estado también se dedican al contrabando de combustible y aprovechan su control de los recursos energéticos para lucrarse con la venta ilícita de combustible. Si bien el Gobierno ha emprendido campañas contra la corrupción, estas iniciativas parecen selectivas, ya que se dirigen a figuras específicas, y dejan intactas las redes más amplias de criminalidad patrocinadas por el Estado.

Los grupos criminales extranjeros desempeñan un papel fundamental en el panorama del crimen organizado de Venezuela, especialmente en las regiones fronterizas y en las zonas ricas en recursos. Los actores externos más influyentes son los grupos armados colombianos, como el ELN y las facciones de las FARC. Estos grupos controlan con firmeza las operaciones mineras ilícitas y los corredores del tráfico de drogas, a menudo en colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas. Sobre todo el ELN ha aumentado su influencia territorial, controla las comunidades locales y grava la minería ilegal y el comercio transfronterizo. Al principio se centraba en el estado de Apure y en el AMO, pero ahora el grupo ha reforzado su presencia a lo largo de la frontera, ha desplazado a rivales como los disidentes de las FARC y Los Rastrojos y se ha asegurado el control de los campos de cultivo de drogas, los laboratorios, las pistas de aterrizaje clandestinas y las poblaciones locales de Zulia y de Táchira, mediante vínculos con las fuerzas estatales. Algunas organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), también han aumentado su presencia en Venezuela. Se sabe que el PCC explota a los migrantes venezolanos vulnerables en Brasil y a menudo los recluta para cometer actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la minería ilegal. Las redes transnacionales de trata de personas explotan a los migrantes venezolanos en toda América Latina y el Tren de Aragua y las organizaciones criminales colombianas desempeñando un papel destacado.

Los actores del sector privado de Venezuela están muy ligados al crimen organizado, sobre todo a través del lavado de dinero, la explotación de personas y el comercio ilícito de productos básicos. Las organizaciones criminales suelen lavar sus ganancias ilícitas a través de bienes raíces, negocios locales y las redes financieras internacionales. El comercio del oro de Venezuela es un vehículo clave para los flujos financieros ilícitos y el oro extraído ilegalmente se introduce de contrabando en Brasil y en Colombia, antes de ingresar en los mercados mundiales. Las empresas también se benefician del trabajo forzoso, especialmente en los sectores de la minería, la construcción y los servicios domésticos. Según los informes, las entidades privadas venezolanas participan activamente en el tráfico de minerales y de

especies silvestres. También se sabe que algunos contables,

abogados y proveedores de servicios financieros actúan como profesionales del lavado de dinero y facilitan estas transacciones con relativa impunidad.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los dirigentes venezolanos han dado prioridad a la seguridad nacional y a la lucha contra el crimen organizado, haciendo hincapié en la importancia de dismantelar las organizaciones criminales, sobre todo las involucradas en el tráfico de drogas. El Gobierno afirma que ha logrado avances significativos y que ha recuperado el control de zonas que antes dominaban las organizaciones criminales. Se han llevado a cabo operaciones policiales a gran escala, como amplias medidas de represión dentro del sistema penitenciario, dirigidas contra bandas poderosas, como el Tren de Aragua. Sin embargo, existen dudas sobre las motivaciones subyacentes de estos esfuerzos y algunos observadores sugieren que tal vez se debieran a cuestiones políticas, en el período previo a las elecciones presidenciales de julio del 2024. Las medidas de aplicación de la ley se centraron en determinados grupos delictivos, mientras que otros parecían operar con relativa impunidad, lo que dio lugar a distintas evaluaciones sobre la eficacia de las iniciativas. Además, se ha acusado al Gobierno de utilizar las medidas contra la criminalidad para justificar la represión contra los opositores políticos y los disidentes civiles.

La gobernanza de Venezuela sigue siendo muy controvertida, debido a las acusaciones de fraude electoral durante las elecciones del 2024. Muchos actores internacionales han rechazado la legitimidad de las elecciones, alegando irregularidades generalizadas, la represión de la oposición política y la detención de disidentes. La validez del Gobierno se ha visto aún más cuestionada por las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, la represión política y la supresión de los medios de comunicación independientes. La crisis electoral ha agravado las tensiones diplomáticas y Venezuela ha roto relaciones con varios países que han criticado su gobernanza. Debido a esta inestabilidad, se ha especulado sobre el posible resurgimiento de alianzas entre los actores estatales y las organizaciones criminales como medio para mantener el control de las regiones en disputa.

La corrupción sigue siendo generalizada en el Gobierno y a menudo se acusa a los funcionarios de facilitar el crimen organizado y de beneficiarse de él. Según los informes, en Venezuela hay un alto nivel de corrupción, lo que afecta a la gobernanza y a la supervisión, y se considera que las instituciones estatales son cómplices de las actividades ilícitas. Aunque existen organismos contra la corrupción, la ley se sigue aplicando de forma selectiva y se suele

dirigir contra los adversarios políticos, en lugar de contra los verdaderos delincuentes. El Gobierno no publica de forma sistemática las principales estadísticas económicas y delictivas, lo que debilita aún más la transparencia. Las leyes sobre la información son débiles y el acceso a los registros públicos está muy restringido, lo que limita la supervisión y la rendición de cuentas.

Los esfuerzos de cooperación internacional han sido desiguales. Aunque Venezuela sigue siendo signataria de las principales convenciones internacionales sobre la delincuencia, su cumplimiento es cuestionable. El país ha dado pasos importantes para revertir el aislamiento que ha sufrido debido a las tensas relaciones con la comunidad internacional desde el 2019. Se han renovado los lazos con aliados como Colombia y Chile, para tratar de combatir el crimen organizado, y con la ONU, para luchar contra el tráfico de drogas. A pesar de todo, los expertos siguen preocupados por el escaso compromiso del Gobierno venezolano con una estrategia eficaz de cooperación internacional contra el crimen organizado. La comunidad internacional también muestra bastante desconfianza hacia Venezuela, en particular en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Las controvertidas elecciones del 2024 han exacerbado las tensiones, lo que tensado las relaciones con los países democráticos y ha reducido aún más la participación de Venezuela en las iniciativas internacionales de lucha contra la delincuencia. El hecho de que el país no haya ratificado tratados claves, como el Tratado sobre el Comercio de Armas, también hace dudar de su compromiso con los marcos de seguridad mundiales.

El marco jurídico de Venezuela para combatir el crimen organizado no ha cambiado demasiado. El país sigue basándose en leyes obsoletas, como la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo del 2012, que abarca una amplia variedad de delitos, pero carece de una aplicación específica. Recientemente se ha introducido una nueva ley de decomiso de activos que permite al Estado confiscar los activos vinculados a actividades ilícitas, aunque existe escepticismo en cuanto a su implementación. Los marcos jurídicos relativos a la trata de personas, el control de las drogas y el contrabando de armas siguen siendo ineficaces, debido a la debilidad de los mecanismos para aplicarlos y a la injerencia política en el Poder Judicial.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

La corrupción y la injerencia política hacen peligrar el sistema judicial venezolano. Los jueces y los fiscales suelen aceptar sobornos de las organizaciones criminales y se han documentado casos de favoritismo judicial a todos los niveles. Debido a la falta de independencia del Poder Judicial, los actores estatales han podido utilizar los procedimientos legales como arma contra sus adversarios políticos y, al mismo tiempo, proteger a los delincuentes afines al Gobierno. En cuanto al sistema penitenciario, las condiciones en las cárceles venezolanas son pésimas, debido al grave hacinamiento, a la falta de financiación y al control criminal de muchas instalaciones. Aunque las fuerzas estatales recuperaron el control de algunas prisiones en el 2023, la sostenibilidad de estos esfuerzos sigue siendo incierta. Muchas bandas carcelarias siguen ejerciendo su influencia y orquestan actividades delictivas tanto dentro como fuera de los muros de las prisiones. El sistema penitenciario carece de programas de reinserción y las instalaciones están plagadas de violencia y de enfermedades, lo que contribuye a la reincidencia.

Abunda la corrupción en los cuerpos de seguridad y muchos agentes participan en actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno ha aumentado la contratación de policías y las capacidades de inteligencia, pero las fuerzas de seguridad siguen siendo objeto de gran desconfianza, debido a su papel en la represión política y a las violaciones de los derechos humanos. De hecho, los informes destacan las violaciones generalizadas de los derechos humanos, como las detenciones por motivos políticos y el uso de confesiones forzadas, obtenidas mediante tortura. El uso continuado de «colectivos» paramilitares para hacer cumplir las políticas estatales debilita aún más la confianza de la población en los cuerpos de seguridad.

Las fronteras de Venezuela son notoriamente porosas, lo que permite el movimiento sin control de mercancías ilícitas, personas y grupos armados. A pesar de la mayor cooperación con Colombia, algunas organizaciones criminales, como el ELN y las facciones disidentes de las FARC, siguen aprovechando la escasa seguridad fronteriza de Venezuela. Las rutas de contrabando siguen activas, lo que facilita el tráfico de drogas, oro y armas. Se ha acusado al Gobierno de tolerar o incluso de colaborar con algunos de estos grupos para mantener el control regional.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Venezuela presenta importantes deficiencias en la aplicación de las medidas para luchar contra el lavado de dinero. Este delito está muy extendido, debido a la economía informal del dólar, la corrupción y el comercio ilícito. En el 2024 se incluyó al país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, debido a la insuficiencia de sus medidas para luchar contra el lavado de dinero y Venezuela es uno de los países de mayor riesgo en materia de delitos financieros. La unidad de inteligencia financiera carece de independencia

y de mecanismos de aplicación eficaces y la cooperación internacional en materia de lavado de dinero es mínima. Las deficiencias en la aplicación de la legislación contra este delito se acentúan, porque el Gobierno depende de operaciones financieras opacas para eludir las sanciones internacionales.

Estas sanciones han empujado a la economía hacia transacciones en el mercado gris, el uso de efectivo y el trueque, para eludir las restricciones y evitar el sistema financiero internacional. El entorno regulatorio económico del país está muy distorsionado por la intervención estatal, la corrupción y los mercados informales. A medida que las industrias tradicionales decaen, los informes indican la persistencia de actividades económicas ilícitas, ya que el contrabando, el cambio de divisas en el mercado negro y la minería ilícita sostienen partes de la economía. Si bien el crecimiento económico se ha reanudado tras una grave recesión, sigue siendo frágil. La inflación y la pobreza siguen alcanzando niveles críticos y las políticas estatales continúan frenando el desarrollo del sector privado. La extorsión y las expropiaciones ilegales de tierras también obstaculizan las operaciones comerciales legítimas.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los servicios de apoyo a víctimas y testigos están muy poco desarrollados en Venezuela. No hay refugios gestionados por el Gobierno para las víctimas de la trata y la mayor parte del apoyo lo proporcionan las oenegés, que operan en condiciones difíciles. Según los informes, el Gobierno no identifica ni protege adecuadamente a las víctimas de la trata. Existen programas de protección de testigos sobre el papel, pero rara vez se utilizan, debido a la desconfianza generalizada hacia los cuerpos de seguridad y el Poder Judicial. La represión política desalienta aún más a las víctimas para buscar justicia, ya que ha habido agentes estatales implicados en abusos contra los derechos humanos.

Las medidas de prevención del crimen organizado siguen siendo limitadas y desiguales. Venezuela ha puesto en marcha estrategias nacionales de prevención de las drogas y de ciberseguridad, pero la corrupción y la falta de aplicación de la ley debilitan estas iniciativas. La prevención de la criminalidad por parte de la comunidad es casi inexistente y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir el crimen organizado se enfrentan a severas restricciones. El Gobierno no ha propuesto alternativas para las personas que se dedican a actividades económicas ilícitas, sobre todo en las regiones donde hay minería ilegal.

El Gobierno venezolano ha emprendido acciones para restringir a los actores no estatales, como las oenegés, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos. Los periodistas y los activistas se enfrentan a acoso, detenciones y violencia, especialmente tras las controvertidas elecciones del 2024. Una nueva ley ha restringido aún más el funcionamiento de las oenegés, lo que afecta a su capacidad para informar sobre la gobernanza,

los problemas relacionados con el crimen organizado y los vínculos con este. A pesar de estos retos, los grupos de la sociedad civil se han vuelto fundamentales para combatir diversas formas del crimen organizado e intervienen donde las fuerzas y las instituciones estatales están ausentes o comprometidas. Las ONGs locales son también los principales actores a la hora de recopilar datos sobre la magnitud de determinados mercados criminales, de documentar las violaciones de los derechos humanos y de apoyar a las víctimas del crimen organizado, incluso con un riesgo personal significativo.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.